

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

El once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022), la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **OMAR ISIDRO CHAVARRÍA SERNA**, contra **PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -PAR ISS-** tramitado bajo el radicado No. **05001-31-05-016-2016-01160-02**.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

#### 1. ANTECEDENTES:

El demandante pretende con la presente acción judicial, que se condene al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -PAR ISS-, al reconocimiento y pago de: (i) la reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa, con base en la Convención Colectiva de Trabajo; (ii) la Prima de Navidad; (iii) el reajuste de la cesantía teniendo en cuenta la retroactividad y el tiempo servido, junto con los intereses sobre el saldo de las mismas; (iv) los auxilios de transporte y de alimentación; (v) la indemnización moratoria del decreto 797 de 1949.

**Como fundamento de hecho de sus peticiones expresa el actor**, que estuvo vinculado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- mediante contrato de prestación de servicios como Auxiliar de Servicios Asistenciales desde el 20 de noviembre de 1995 hasta el 30 de noviembre de 2002, fecha en la que fue despedido sin justa causa por la demandada. Que inició demanda ordinaria laboral para la declaratoria de la relación laboral con el ISS, pretendiendo el pago de la liquidación y la correspondiente indemnización por despido sin justa causa, la que fue conocida

por el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, el que mediante sentencia del 16 de febrero de 2004, ordenó su reintegro en las mismas condiciones y el pago de prestaciones sociales legales y extralegales, decisión confirmada el 16 de abril de 2004 por la Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín. Que luego impetró nueva demanda para obtener el reconocimiento y pago del incremento por servicios prestados, la prima de navidad, y el reajuste de los intereses sobre las cesantías retroactivas por los años 2002 a 2011, demanda que fue conocida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, el cual mediante sentencia del 11 de febrero de 2015 absolvió al ISS de las pretensiones referidas, decisión confirmada el 7 de septiembre de 2015 por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín.

Indica que se ha desempeñado como trabajador oficial, miembro del sindicato SINTRASEGURIDADSOCIAL por lo que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo de dicha entidad, y mediante Resolución N° 7893 del 13 de febrero de 2015 el ISS decidió terminar su relación laboral liquidando la suma de \$45.948.365, por concepto de prestaciones sociales e indemnización, sin tener en cuenta para su liquidación la sentencia de reintegro y reliquidación. Sostiene que a partir del 2001, año de entrada en vigencia de la CCT, le deben ser reconocidos beneficios tales como auxilio de transporte y auxilio de alimentación contenidos en los artículos 53 y 54 de la convención, y que la prima de navidad solo le fue reconocida hasta la fecha del reintegro, por lo que debe ser liquidada atendiendo lo establecido en el Decreto 0853 de 2012.

Que en la Convención Colectiva de Trabajo se pactó la congelación de las cesantías retroactivas desde el año 2002 hasta diciembre de 2011, afectando los intereses a las cesantías que no correspondían al saldo de las cesantías retroactivas. A partir del año 2012 la demandada efectuó la liquidación de los intereses sobre el saldo real, por dejar de operar la congelación; para el año 2013 fueron reducidos. Las cesantías solo se causan al momento de terminación del contrato, que para el caso es el año 2015, cuando el derecho se causó ya no estaba congeladas la retroactividad, siendo obligación de la entidad su liquidación retroactiva. La reliquidación de la indemnización por el despido sin justa causa es la consagrada en el artículo 5 literal d) de la CCT, que para su liquidación tiene en cuenta por el primer año 50 días de salario y 105 días de salario por los años subsiguientes. Por último, manifiesta que presentó reclamación administrativa ante el PAR ISS solicitando lo pretendido en

esta demanda, mediante escrito del 05 de febrero de 2015 la entidad no accedió a lo pedido.

## 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL ISS EN LIQUIDACIÓN se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento fáctico y legal, por cuanto la liquidación de las prestaciones sociales y la indemnización se realizó de conformidad con la ley y la convención colectiva de trabajo. Sobre los hechos, dijo que no le constan del primero al hecho quinto: la fecha de la contratación, el tipo de contratación, la duración del vínculo, tampoco la forma de terminación de la relación contractual, o si es beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo. Admite la calidad de trabajador oficial del demandante, la CCT y sus disposiciones, el congelamiento del auxilio de las cesantías y las diferentes primas mencionadas en el escrito convencional. Propuso como excepciones de fondo, cosa juzgada; inexistencia de la obligación de pagar reajuste de salarios, prestaciones sociales legales y extralegales; inexistencia del reconocimiento del retroactivo de las cesantías y los intereses a las cesantías; inexistencia de la obligación de pagar sanción moratoria; inexistencia de la obligación; pago; prescripción; compensación; buena fe del ISS e imposibilidad de condena en costas.

## 3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 24 de febrero de 2021, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín NEGÓ la totalidad de las pretensiones del actor, declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación.

## 4. DEL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada del demandante interpuso recurso de apelación argumentando que en primer lugar, el juez absuelve del reconocimiento de **cesantía e intereses a la cesantía**, por encontrar su aplicación y liquidación ajustada a la cláusula 62 de la Convención Colectiva; no obstante, en la misma se pactó la congelación de las cesantías retroactivas desde el 2001 hasta el año 2011, afectando con ello los intereses sobre la cesantía que no correspondían al saldo de las cesantías retroactivas que debieron ser liquidadas de manera anual, a partir del año 2012 la entidad efectuó la liquidación de tales cesantías por el saldo real. Que

se evidencia en el expediente, cuál fue el valor reconocido al demandante por concepto de intereses a la cesantía, no obstante, para el año 2013 y siguientes, la entidad los calculó de manera deficitaria, teniendo en cuenta que los mismos sólo se causan a la terminación del contrato de trabajo la cual operó en el 2015, momento en la cual no se encontraba congelada la retroactividad.

Frente a la **prima de navidad**, adujo aportarse de la sentencia de reintegro (f. 36) en la que el demandante fue reintegrado al cargo del cual había sido despedido sin justa causa, sin solución de continuidad y con las mismas garantías laborales que tenía en su momento. En esa vinculación que operaba desde el 20 de enero de 1995, la entidad liquidó las vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad y primas de alimentación, es decir, el demandante ya tenía esas garantías desde la fecha misma que se vinculó al ISS, y calcula la prima de servicios para los meses de junio y diciembre de los años 1999, 2000, 2001 y 2002, y adicionalmente se reconoce la prima de navidad para los mismos años, periodos en los que se encontraba desvinculado, razón por la cual no existe razón para que la entidad posterior al reintegro, dejara de cancelar la prima de navidad.

Pide reconocer los **auxilios de alimentación y transporte**, dado que las convenciones colectivas tienen como naturaleza conceder beneficios adicionales a los legales.

Solicita que se condene igualmente a Fiduagraria S.A. a la **reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa**, en donde se tenga en cuenta la convención colectiva de trabajo, el reajuste de la sentencia de reliquidación y todas y cada una de las peticiones que se elevan, por cuanto dicha indemnización fue calculada de manera deficitaria por el ISS.

peticiona **se condene en costas a la entidad** en su totalidad, toda vez que el despacho, frente a la prueba solicitada y frente al auxilio de alimentación, argumenta que no pudo realizar operaciones aritméticas porque no hay prueba de pagos en cuanto a prestaciones; misma que se solicitó pero fue negada, indicando que esa información pudo haber sido aportada por la parte actora, no obstante, están en el poder de la entidad demandada sin que aportara ninguna prueba clara y conducente frente a las excepciones propuestas.

## 5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

En esta instancia, el actor presentó alegatos ratificándose en los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Insiste en el derecho a la prima de navidad la cual le fue desconocida con posterioridad a su reintegro; la convención colectiva consagra la referida prima de servicio en el artículo 50, señala que ese beneficio sería *“en adición a la prima legal”*, y la naturaleza de éstas, es acordar beneficios superiores a las disposiciones legales. La prima de navidad está regulada por los artículos 11 del Decreto 3135/68, 51 del Decreto 1848/69, 17 del Decreto 0853/12, 17 del Decreto 1029/13 y 17 del Decreto 1101/15, de los cuales se puede verificar que el reconocimiento de este derecho no está condicionado a que no haya devengado ninguna otra prima equivalente, incluso, por el contrario, las mismas normas consagran adicional a la prima de navidad, la prima de servicio. Téngase en cuenta para el efecto las sentencias de la CSJ, radicado 42546 de 2012 y 1012 de 2015, así mismo múltiples pronunciamientos del Tribunal Superior de Medellín. Para negar la prima de navidad, se acude a que el artículo 51 del Decreto 1848 de 1969, indicaba que los trabajadores oficiales del ISS estaban excluidos de este derecho, por cuanto tenían en su convención colectiva consagrada una prima que se consideraba equivalente a la de navidad. Contrario a lo ello, considera que la prima de navidad no es excluyente con la prima establecida en el artículo 50 de la convención colectiva, por las siguientes razones: con la expedición del Decreto 853 de 2012, específicamente en su art. 17, no se consagra la exclusión que contenía el art. 51 del Decreto 1848 de 1969, para consagrar la prima de navidad para todos los trabajadores oficiales y empleados públicos, sin excluir aquellos que en sus convenciones disponen una prima equivalente como lo hacía la norma anterior. Así las cosas, deben ser reconocidas dichas primas causadas por lo menos con posterioridad a la expedición del Decreto de 2012.

Es necesario resaltar que cuando el Decreto 853 de 2012, expresa en su artículo 17 que *“respecto de quienes por disposición legal o convencional no tengan establecido otra cosa”* esto no está haciendo referencia a una exclusión de manera implícita, sino que está haciendo referencia a la forma en cómo se debe financiar esa prima de navidad, es decir, quiere indica el artículo en mención que, salvo que alguna disposición legal o convencional no consagren una forma diferente de liquidar la prima de navidad, la misma será liquidada en la forma allí indicada. Tratándose entonces de primas de navidad causadas con posterioridad al año 2012, es decir, la expedición del Decreto 853/12, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín ha reconocido este derecho en otras oportunidades, ejemplo de ello, procesos con

radicado 0500131050102013-38400, 0500131050072013-92600 y 50013105017201601423.

Respecto de las cesantías retroactivas e intereses sobre las cesantías, la convención colectiva estableció que entre el año 2001 y 2011 los trabajadores del ISS no iban a tener derecho al pago de cesantías retroactivas sino al pago anual de cesantías, lo que generaba que a diciembre 31 se liquidara el saldo de cesantías causado anualmente y se reconocieran unos intereses sobre éstas. La congelación mencionada, culminó el 31/12/11, por lo que, a partir del 1/01/2012 se retomó el régimen retroactivo de cesantías. Pese a lo anterior, al momento de realizar la liquidación definitiva de cesantías, se liquidó una parte como régimen retroactivo y otra como régimen anualizado. Lo anterior implicó que las cesantías y sus intereses fueran liquidados en forma deficitaria, pese a ello, el ISS sostuvo que la congelación implicaba que ese tiempo no se tuviera en cuenta, lo que no es cierto. La causación del derecho se dio para marzo de 2015, de tal forma ya no se encontraba congelada la retroactividad, siendo obligación de la entidad liquidar este derecho en forma retroactiva, teniendo en cuenta toda la antigüedad en la entidad. Para la liquidación de los intereses a las cesantías para el año 2012, el ISS tuvo en cuenta todo el tiempo de servicio y sobre ellos liquidó los intereses, sin embargo, para el año 2013 no fue así, pues fueron reducidos sin justificación alguna, debiéndose entonces reconocer las mismas a proporción.

La indemnización por despido sin justa causa se encuentra liquidada en forma deficitaria por cuanto al interpretar la norma convencional, acogió la más desfavorable, lo correcto es que por los años adicionales al primero, debe reconocerse 105 días de salario por cada año.

En cuanto al reajuste de los beneficios extralegales denominados auxilio de transporte y auxilio de alimentación, la convención colectiva indica que estos derechos iban a ser reconocidos en la cuantía que se tenía al año 2001 reajustado a los años siguientes conforme al IPC, no obstante, lo anterior, el demandante no recibe este beneficio conforme a la convención. La convención colectiva, incluso para la fecha de liquidación definitiva del trabajador, se encontraba vigente, por lo que el auxilio de transporte y de alimentación del artículo 53 y 54 de Convención, debieron ser cancelados en la forma indicada, factores que constituyen salario por lo que el no reconocimiento afectó la liquidación de prestaciones sociales legales y extralegales e igualmente la cotización al sistema de seguridad social.

Adicionalmente, durante todo el tiempo de vinculación en la entidad, al demandante le fueron cancelados dichos conceptos sobre en el mismo monto, lo que evidencia que no fueron actualizados, valores que solicita se ordene el pago indexado.

Por lo anterior, solicita se revoque la decisión, y en su lugar concedan cada una de las pretensiones.

Tramitado el proceso en legal forma, y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación y la consulta de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los Arts. 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes.

## **6. CONSIDERACIONES:**

El análisis del caso, versará sobre lo que es objeto de recurso de apelación del actor, atendiendo lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

Primeramente, es preciso advertir que las partes no controvierten sobre lo siguiente:

*i)* Que el señor OMAR ISIDRO CHAVARRÍA SERNA ostentaba la calidad de trabajador oficial del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -Ayudante de Servicios Asistenciales- *ii)* era beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2001-2004, en razón al carácter mayoritario del sindicato en mención; y *iii)* Que el actor laboró para dicho instituto desde el 20 de noviembre de 1995 hasta el 30 de marzo de 2015<sup>1</sup>.

El señor OMAR ISIDRO fue reintegrado al trabajo por orden judicial, con el pago de las prestaciones legales y extralegales, a partir del 30 de noviembre de 2002, según sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Bello el 16 de febrero de 2004, confirmada y adicionada por la Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín (fs. 19/76). Puntualizado lo anterior, pasará la Sala a resolver los puntos recurridos.

---

<sup>1</sup> Según se observa a folio 106 del expediente en el escrito de LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES.

**1.- De las cesantías.** La parte demandante pretende la reliquidación de las cesantías de forma retroactiva, por todo el tiempo laborado (1995/2015), de conformidad con lo establecido en la ley 344 de 1996, el decreto 3118 de 1968 y el decreto 116 de 1976, aplicando el principio de favorabilidad, los derechos mínimos irrenunciables de los trabajadores y la ineficacia de las cláusulas que afectan aquellos derechos, señalando que, convenciones como la suscrita con la demandada (2001-2004), no pueden modificar negativamente las condiciones de trabajo, en este caso, liquidando las cesantías a la finalización de la relación laboral (marzo de 2015) y luego de la culminación de la congelación retroactiva de las mismas (31 de diciembre de 2011), *“una parte como régimen retroactivo y otra parte como régimen anualizado”* según dispuso la convención.

No obstante lo anterior, considera la Sala que, en este caso concreto del pago de las cesantías, debe estarse al acuerdo convencional al respecto, porque la cláusula 62 de la CCT existente en la entidad (fl. 142) estableció que a partir del 1º de enero de 2002 se congelaría la retroactividad de las cesantías por 10 años. Señala el texto convencional:

*“A partir del primero de enero del año 2002 se congela la retroactividad de las cesantías por diez (10) años.*

*El instituto procederá a liquidar a 31 de diciembre de 2001 en forma retroactiva las cesantías de la totalidad de los trabajadores y liquidará sobre dicho monto intereses en cuantía del 12% anual correspondiente al año 2001 los cuales serán cancelados durante el mes de enero del año de 2002.*

*A 31 de diciembre del año 2002 y por los años subsiguientes las cesantías se liquidarán anualmente, por las mismas se reconocerán intereses a la tasa del 12% anual por el respectivo año objeto de liquidación los cuales serán cancelados durante el mes de enero del año siguiente.*

*Sobre el monto de las cesantías liquidadas al 31 de diciembre del año 2001 el instituto reconocerá a partir del 1 de mayo del 2002 intereses equivalentes al 15% anual. En el caso de los trabajadores que no gocen de prima técnica esta tasa de interés se incrementará en un punto. Los intereses aquí señalados se pagarán en el mes de enero del año siguiente, esto es enero de 2003. En los años subsiguientes el saldo de dichas cesantías acrecentado por las cesantías anuales liquidadas por el año inmediatamente anterior y disminuido en el monto de las cesantías parciales pagadas durante la vigencia causaran unos intereses a las mismas tasas y por los mismos grupos de trabajadores antes señalados.*

*A partir del año 2012, para efectos del pago de cesantías parciales se destinará una partida con recursos anuales equivalentes, como mínimo del 18% del valor de la deuda por concepto de las cesantías liquidadas al 31 de diciembre de 2001.*



*La distribución y asignación de estos recursos se realizará conjuntamente por la empresa y el sindicato.”*

La ley permite que en el momento en que se hizo el tránsito del sistema retroactivo de cesantías al sistema anualizado de cesantías las partes puedan pactar beneficios adicionales que logren llegar a compensar la pérdida del valor retroactivo de las cesantías que sería lo acontecido en el caso del Seguro Social, cuando se estableció el pago de unos intereses a las cesantías sobre los cuales los empleados de la entidad no tendrían derecho en condiciones regulares como más adelante se verá.

Vale destacar que en la liquidación definitiva de prestaciones sociales del accionante (fl. 106) se observa cómo la entidad liquidó el equivalente a 3.37 días bajo el sistema de **retroactividad**, que correspondería a los periodos transcurridos entre la fecha de ingreso, noviembre 20 de 1995 y el 31 de diciembre 2001, según se entiende del inciso 1° del artículo 62 convencional; e igualmente entre el 31 de diciembre de 2011 (fecha en que culminó el periodo de congelación) y el 30 de marzo de 2015 que corresponde a la data de terminación del contrato de trabajo. Luego, entonces, de manera **anualizada**, comprendió el periodo estipulado en la convención entre el 1° de enero de 2002 y 1° de enero de 2012. En eventos análogos al presente, esta Sala ha acogido la voluntad de las partes negociadoras de la CCT, y ha respetado el sentido de los acuerdos en punto a admitir la validez de la liquidación anualizada del citado auxilio –que es la que aquí se discute-, máxime que dentro del rol de las negociaciones, se estipuló, a modo de compensación para los trabajadores oficiales del ISS, el reconocimiento de unos intereses a las cesantías para la liquidación retroactiva a diciembre 31 de 2001, en el equivalente al 12%, y a partir del 1° de enero del año 2002 equivalentes al 15%.

Como se puede observar entonces, conforme a la liquidación definitiva de prestaciones sociales obrante a folio 106 del expediente al demandante se le realizó la liquidación correspondiente con el régimen retroactivo de cesantías por los periodos en los cuales no estaba vigente la CCT, y de forma anualizada según lo pactado por los trabajadores y la demandada recibiendo un valor total de \$29.289.200.

El régimen de cesantías con liquidación retroactiva que regulan las leyes invocadas por el actor se caracteriza porque la liquidación de las mismas tiene lugar al finalizar la relación laboral con el último salario devengado, que para este caso era de \$1.785.979, régimen de retroactividad que contario al régimen de liquidación

anualizado, no contempla el pago de intereses. De esta circunstancia relativa al no pago de intereses de las cesantías en el régimen de retroactividad se ha pronunciado el Consejo de Estado en diferentes sentencias, así lo hizo por ejemplo en la radicada número 1998-02371 de agosto 18 del 2011 sección 2 subsección D. Consejero Ponente GERARDO ARENAS MONSALVE y en la sentencia con radicado final 2005-02673 de noviembre 29 de 2012 sección 2 subsección D. Consejero Ponente GERARDO ARENAS MONSALVE, entre otras.

Pero es más, para el año 1995 que el actor se vinculó con el ISS, este instituto tenía la naturaleza de EICE de orden NACIONAL acorde al Decreto 2148 del 30 de diciembre de 1992, por lo que el régimen legal de cesantías que le sería aplicable es el del Decreto 3118 de 1968 por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro y se establece la afiliación obligatoria de los trabajadores oficiales *establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado*.

Los arts. 3 y 27 del referido decreto disponen lo siguiente:

***“Artículo 3º.- Entidades vinculada al Fondo. Deberán liquidarse y entregarse al Fondo Nacional de Ahorro conforme a las disposiciones del presente Decreto, las cesantías de empleados públicos y trabajadores oficiales de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional.”***

***“Artículo 27º.- Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.”***

Conforme a lo expresado en precedencia, si nos atenemos a la Ley, el actor no tuvo o derecho al régimen de retroactividad de cesantías, sino al anualizado del Fondo Nacional de Ahorro, salvo que existiera una norma convencional que dispusiera el régimen de retroactividad, inaplicando el Decreto 3118 de 1968, lo que no se encuentra probado en el proceso.

Ahora, de la lectura de Art. 62 de la convención 2001-2004, se podría deducir que los trabajadores del ISS tenían régimen de liquidación de cesantías retroactivo, en virtud de convención celebrada con anterioridad, pues si el citado Art. 62 congela el régimen de retroactiva de cesantías, era porque antes de esta convención existía otra que establecía el régimen de retroactividad, sin embargo de una parte en el proceso no obra ninguna otra convención distinta la de la vigencia 2001-2004, lo que no permite establecer bajo qué condiciones se aplicaba el régimen convencional de

retroactividad de cesantías, y de otra parte, si tal convención existía, con ella lo que se había logrado era inaplicar el régimen anualizado de cesantías que legalmente correspondía los trabajadores del ISS conforme al Decreto 3118 de 1968 como ya se explicó, y por ello lo previsto en la convención 2001-2004 sobre congelación del régimen de cesantías retroactivas, no comportaba ninguna ilegalidad por desconocimiento de derechos mínimos legales irrenunciables, pues el actor no era beneficiario de un régimen legal que otorgara la retroactividad de las cesantías, ni tampoco de puede predicar o violación al principio de favorabilidad, pues si convencionalmente se habría establecido un régimen de cesantías retroactivas inaplicado el anual que legalmente correspondía, ninguna ilegalidad comportaría que se hubiera acordado en la convención 2001- 2004 que temporalmente se regresara al régimen legal anualizado de liquidación de cesantías, pues precisamente las negociaciones convencionales son para realizar los ajustes que las partes consideren no solo en beneficio del trabajador, sino de las empresas cuando libremente lo acuerden las partes, siempre que no desconozcan derechos mínimos legales irrenunciables que no es lo que ocurrió en este caso, lo que conlleva a que este aspecto de la apelación deba ser desestimado, pues la Sala no encuentran razones para variar la postura que ha tenido en sentido de darle validez al artículo 62 convencional, en cuanto dispuso la congelación de las cesantías a partir del 1 de enero del año 2001.

**2. Respecto del reajuste de los intereses a las cesantías**, por las mismas razones antes indicadas respecto de las cesantías, se despachará negativamente la pretensión del reajuste de tales intereses, pues el reajuste devendría de un mayor valor de cesantía, que como ya se explicó el demandante no tiene derecho.

**3. - De la prima de Navidad.** Respecto a la procedencia del pago de la prima de navidad, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia con Rad. 35.954 de mayo de 2012, puntualizó la improcedencia de esta prestación cuando quiera que el servidor público perciba otra clase de primas de naturaleza extralegal, en cuantía igual o superior. Sustentó la Corte su postura jurídica en lo normado en los artículos 51 del Decreto 1848/69, reglamentario del artículo 11 del Decreto 3135/68 modificado por el artículo 1º del Decreto 3148/68; luego de transcribirlos, dedujo esa Colegiatura que:

*“De donde claramente resulta, que para que se produzca la incompatibilidad entre la prima de navidad prevista en el artículo 51 del*

*Decreto 1848/69 y otros derechos prestacionales laborales se exige: 1º) que el servidor público perciba otra clase de primas de naturaleza extralegal. Esto es, originadas en convención, pactos, laudo arbitral o reglamento interno de trabajo; 2º) que esas prestaciones de referencia tengan carácter anual; 3º) que su cuantía sea igual o superior al de la prima de navidad, pues si fuere inferior su valor será equivalente al de la diferencia entre una y otra; y 4º) que no se hubiere mejorado dicha regla por la convención, el pacto, el laudo arbitral o el reglamento interno de trabajo, por cuanto en tal caso, por mejorarse el mínimo legal, prevalecerá la disposición extralegal.”*

No obstante, precisó esta misma Corporación en reciente pronunciamiento que, para eximir al trabajador de la prima legal de navidad, es imperativo que se demuestre que recibía una prima extralegal igual o superior, sin que sea la prima semestral de servicios consagrada en la CCT 2001-2004, una prestación con la que se pueda equiparar:

*“En lo atinente a la supuesta incompatibilidad a la que se refiere el instituto convocado al proceso, dado que al demandante le fue reconocida la de servicios con venero en el artículo 50 de la Convención Colectiva de Trabajo, no es admisible, pues como se explicó en la sentencia CSJ SL, del 1º sep.2009, rad. 33676, para que se exima a un trabajador oficial de la prima de Navidad legal, es menester que se demuestre que tenía “derecho a primas anuales de cuantía igual o superior cualquiera sea su denominación”, consagradas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, fallos arbitrales o reglamentos internos de trabajo.*

*Ese supuesto no está probado en el asunto bajo escrutinio, pues la cláusula 50 de la convención colectiva de trabajo lo que consagró fue la prima semestral de servicios para compensar la legal que, como lo ha dicho de manera reiterada esta Corte, no está prevista a favor de los trabajadores oficiales, sin que se haya demostrado, se insiste, que la demandante devengaba una prima anual extralegal que excluyera la legal de Navidad, ya que no es dable jurídicamente darles un tratamiento normativo igualitario a prestaciones de estirpe sustancialmente diferente.”*

En este sentido, en principio no le asistiría razón al Juez de primera instancia en cuanto negó el reconocimiento de la prima de navidad al demandante, bajo el argumento que el mismo percibía el pago de la prima de servicios consagrada en el artículo 50 de la CCT, pues tampoco se probó en el proceso, que el señor OMAR ISIDRO recibiera una prima extralegal similar, que su cuantía fuera igual o superior al de la prima de navidad.

No obstante lo anterior, la Sala no puede pasar desapercibido, que el actor sobre el derecho a la prima de navidad, ya había tramitado otra demanda en proceso anterior, en el que solicitaba como pretensión entre otras prestaciones la prima de navidad, lo que hace necesario estudiar el tema jurídico de la excepción de cosa juzgada propuesta por el PAR ISS.

Ahora, antes de proceder a la liquidación de la prima de navidad, entrará a resolver la Sala, la excepción de cosa juzgada propuesta por el PAR ISS, como consecuencia de los procesos ordinario interpuestos por el actor OMAR ISIDRO, de los cuales tuvo conocimiento el Juzgado 8 Laboral del Circuito de Medellín y Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín. De acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina especializada, l

La cosa juzgada es una institución compleja para lo cual, se requiere que concurren, en ambos juicios, tres requisitos comunes: (i) identidad de objeto, (ii) identidad de causa e (iii) identidad de partes.

Las llamadas "identidades procesales" constituyen, entonces, los límites a la existencia de la cosa juzgada. Así lo dispone el propio artículo 303 del Código General del Proceso al señalar que la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, *"siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes"*.

En el caso bajo análisis, en relación con el proceso ordinario conocido por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín bajo el radicado 008-2012-01096, del actor contra el ISS EN LIQUIDACIÓN, escuchada la sentencia de la *a quo*, en ella se manifiesta en los considerandos para resolver que entre las pretensiones del actor está la del reconocimiento de prima de navidad, por lo que existen identidad de partes, y de causa pues era objeto, del litigio la PRIMA DE NAVIDAD.

En tal proceso la juez decidió en la parte resolutive: *"PRIMERO: ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, y a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y, PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL UGPP, en calidad de sucesora procesal de la totalidad de pretensiones invocadas por el señor OMAR ISIDRO CHAVERRA SERNA ..."*. A pesar que la juez no esgrimió ningún argumento para

negar la pretensión de la prima de navidad, el apoderado del actor tampoco apeló la sentencia respecto de la pretensión de la referida prima, por lo que a juicio de la Sala operó la cosa juzgada, toda vez que para situaciones en las que el juez decide negar una pretensión sin motivación, el remedio judicial no puede ser adelantar otro proceso con la misma pretensión, sino recurrir a los medios legales para obtener que la decisión negativa sin motivación sea remediada, como podría ser el uso del recurso de apelación, la acción de tutela o incluso la acción de revisión, por lo que a juicio de la Sala operó respecto de la pretensión de la prima de navidad a cosa juzgada, y así se declarará.

Ahora, aunque en principio podría pensarse que la prima de navidad no haría tránsito a cosa juzgada, por cuanto el demandante la solicita en este proceso con fundamento en el Decreto 0853 de 2012, por lo que sería una prestación distinta en su origen legal a la negada en el proceso del radicado antes citado, sin embargo es menester tener en cuenta que la jurisprudencia de la CSJ (Sent. SL8936-2015 y SL593 de 2021) ha establecido que la prima de navidad legal en el ISS, es procedente con fundamento en el artículo 51 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del artículo 11 del Decreto 3135 de 1968, modificado por el artículo 1º del Decreto 3148 de 1968, al no estar prevista en la convención alguna prima equivalente, no que porque esta haya sido instituida en el Decreto 0853 de 2012.

De otra parte, revisado el referido Decreto mediante él: *“se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones”* concluyéndose que con él no se establecía una nueva prima de navidad en reemplazo de la ya prevista en el artículo 1º del Decreto 3148 de 1968, **sino que en el** Decreto 0853 de 2012 lo que se traía a colación era la misma prima de navidad del artículo 1º del Decreto 3148 de 1968, a la que se hacía mención a propósito del establecimiento de las escalas de asignación básica de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y no una nueva consagración legal del derecho a tal prima.

El anterior criterio cobra más fuerza si se tiene en cuenta que el referido Decreto 0853 de 2012, fue derogado por el art. 38, Decreto Nacional 1029 de 2013, a la vez derogado por el art. 38, Decreto Nacional 199 de 2014, a la vez derogado por el art.

38, Decreto Nacional 1101 de 2015, a la vez derogado por el art. 38, Decreto Nacional 229 de 2016, todos ellos mediante los cuales se fijan las escalas de asignación básica de los empleos, y todos hacen mención en el Art. 17 a la citada prima de navidad, de lo que se concluye que el Decreto 0853 de 2012, en realidad lo que hace era reproducir a propósito de *la fijación cada año de las escalas de asignación básica de los empleos*, pero tal prima tiene su origen en el primigenio artículo 1º del Decreto 3148 de 1968, lo que no permite sostener que la negada en el proceso del proceso 08-2012-01096, era una prima de navidad distinta por su origen legal, de la que en el presente proceso se pretende.

Pero es más, revisado el referido Decreto 0853 de 2012 él entro en vigencia el 25 de abril de 2012, por lo que a la fecha de presentación de la demanda y del fallo del proceso 08-2012-01096, el mismo se encontraba vigente, y sin que haya prueba que la referida prima de navidad se solicitó en el proceso del radicado antes mencionado con base en otra norma legal.

**4.- Indemnización por despido injusto.** Al exponer los fundamentos de la apelación y del libelo gestor del proceso, el demandante argumenta que de la interpretación del artículo 5º de la CCT surge, que por cada año al trabajador se le deben otorgar 55 días adicionales a los 50 del literal a), lo cual arroja por cada año laborado un total de 105 días, por lo que anta tal interpretación favorable del acuerdo convencional, la liquidación realizada por el ISS es deficitaria.

Menciona asimismo que el Juez de instancia no realizó un cálculo preciso de la liquidación de la indemnización, pues al no tenerse en cuenta todas las prestaciones sociales y los factores salariales, la misma fue deficitaria y no se hizo en los términos de la Convención Colectiva de Trabajo.

En un primer término, la Sala se aparta de la propuesta de liquidación de 105 días por cada año adicional laborado, pues el principio de favorabilidad opera, en una primera modalidad, en caso de duda sobre la aplicación de dos o más normas vigentes de trabajo, caso en el cual prevalece la más favorable al trabajador; o en una segunda vertiente, que es la que suscita este diferendo, cuando una sola norma jurídica admite varios sentidos posibles y razonables, evento en el cual debe aplicarse el que más favorezca al trabajador, modalidad esta que es la que técnicamente se conoce como la regla del In Dubio pro Operario.

Pero en este punto, la Sala considera que no se presenta tal dualidad de interpretaciones razonables o atendibles en la forma como se plantea la pretensión, ya que la redacción se antoja clara, cuando dispone la norma: *a) 50 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de 1 año; y ...d) Si el trabajador tuviere 10 o más años de servicio continuo, se le pagarán 55 días adicionales de salario sobre los 50 básicos del literal a) por cada uno de los años de servicios subsiguientes al 1º y proporcionalmente por fracción”.*

El acuerdo convencional en tales términos concebido, mejoró evidentemente las tablas indemnizatorias que regían al momento de la firma de la convención, lo que sucedió el 31 de octubre de 2001, con lo que se cumplía uno de los fines de toda negociación colectiva cual era acrecentar los derechos mínimos consagrados en la ley. Se reitera, se encuentra que la redacción de la disposición convencional es clara, y así ha sido entendido el punto de manera inveterada, en el sentido de que la indemnización se calcula a razón de 50 días cuando el trabajador tuviere un tiempo inferior a 1 año de servicios, pues si tiene más de ello, por cada año subsiguiente se liquidan, según el tiempo de antigüedad, 30 días en el rango de 1 a 5 años por cada año adicional de trabajo sobre el primer año (literal b del artículo 5), 35 días por cada año que supere los 5 e inferior a 10 (literal c), y 55 días por cada año adicional a los 10 años de servicios (literal d). Pero entonces para la Sala hay claridad del entendimiento de la norma y por tanto no hay lugar a aplicación de la interpretación favorable o principio de favorabilidad.

Frente a este tema de liquidación de las indemnizaciones laborales, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido una posición pacífica, tal y como se puede apreciar en innumerables providencias en las que ha liquidado la indemnización por ejemplo del artículo 28 de la Ley 789/02, que contiene una forma jurídica similar a la del artículo 5 de la CCT, tomando 30 días por el primer año y 20 por cada año subsiguiente, sin que sea factible otra interpretación. Así lo ha hecho en providencias como la SL 15361 del 6 de septiembre de 2017, rad. 55940; SL 19830 del 8 de noviembre de 2017, rad. 50377; SL 1480 del 11 de abril de 2018, rad. 54850; SL 1809 del 23 de mayo de 2018, rad. 58615 y la SL 2193 del 13 de junio de 2018, radicado 61895.

En segundo término, sobre la liquidación del Juez de primera instancia, basta con verificar la indemnización pagada al demandante en la liquidación definitiva de fl. 106, en la que se tuvo en cuenta el tiempo laborado por el trabajador superior a 10 años



de servicios, dando aplicación al literal **d)** del artículo 5 de la CCT, equivalente a 50 días de salario por el primer año de servicios, 55 días adicionales de salario por los 18 años subsiguientes y proporcional, para un total de 1.060,013 días y una indemnización de \$63.105.409, calculado incluso con el salario de \$1.785.979; liquidación esta última que observa la Sala fue realizada por el Juez A quo teniendo en cuenta los factores salariales a los que tiene derecho el actor, aplicando los términos indicados en el literal d citado, y sin que el apoderado del demandante haya especificado cuáles fueron los factores que no se tuvieron en cuenta para su liquidación a efecto que el Tribunal pudiese verificar su procedencia.

Así las cosas, la liquidación efectuada por la entidad se ajusta a derecho en esta materia, pues, el demandante laboró un total de 19,3 años (entre nov 20/95 y marzo 30/2015), lo que arroja, 50 días por el primero año, y 55 días por cada año subsiguiente (55 x 18) y proporcionalmente por fracción de año, es decir, un total de 1060,013 días de indemnización. Al efectuar la operación aritmética, multiplicado por el salario diario (\$59.532.6333), arroja la suma que efectivamente liquidó la entidad.

**5.- Auxilio de alimentación y transporte.** Respecto a estos conceptos, tal y como lo dispuso el Juez de Primera Instancia, no cuenta la Sala con la prueba clara y precisa para proceder con la reliquidación pretendida, a través de la cual se identifique la diferencia aludida por la parte demandante por concepto de auxilio de alimentación y transporte.

Tampoco se puntualizó en los hechos de la demanda algún fundamento fáctico en la liquidación que soportara tales pretensiones, siendo deber de la parte actora sustentarlas en los hechos del libelo introductor<sup>2</sup>. Lo dicho trae como consecuencia lógica, la imposibilidad para el operador jurídico de realizar cualquier tipo de cuentas matemáticas relacionadas con el pago de los conceptos que se reclaman con la presente demanda, de reajuste de auxilio de alimentación y transporte.

---

<sup>2</sup> La Corte Constitucional a través de la sentencia T-074 de 2018 ha establecido que: “Por regla general, la carga de la prueba le corresponde a las partes, quienes deben acreditar los hechos que invocan a su favor y que sirven de base para sus pretensiones. Este deber conocido bajo el aforismo “*onus probandi*”, exige la realización de ciertas actuaciones procesales en interés propio, como la demostración de la ocurrencia de un hecho o el suministro de los medios de pruebas que respaldan suficientemente la hipótesis jurídica defendida. De ahí que, de no realizarse tales actuaciones, según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, el resultado evidente sea la denegación de las pretensiones, la preclusión de las oportunidades y la pérdida de los derechos (Sentencia C-086 de 2016)”.

Con base en los anteriores argumentos facticos, probatorios y de derecho, se confirmará la sentencia de primer grado.

Costas en esta instancia a cargo del demandante, por haber resultado vencido en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.000.000

## **7. DECISIÓN:**

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

## **RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado 16º Laboral del Circuito de Medellín, el 24 de febrero de 2021, en el proceso ordinario laboral del señor OMAR ISIDRO CHAVARRÍA SERNA, contra PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -PAR ISS, pero por las razones expuestas en esta instancia.

**SEGUNDO: COSTAS** en esta instancia a cargo del demandante, por haber resultado vencido en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, las estima el ponente en la suma de \$1.000.000.

La presente sentencia se notifica a las partes por **EDICTO**.

Vuelva el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma la providencia por quienes intervinieron en la decisión, los Magistrados,

**SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO  
JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ**

**Agosto once (11) de dos mil veintidós (2022)**

Ref: OMAR ISIDRO CHAVARRÍA SERNA vs.  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS  
SOCIALES -PAR ISS-  
Radicado 05001 31 05 016 2016 01160 - 01

Con el debido respeto, expongo mi desacuerdo parcial con la decisión mayoritaria tomada por mis compañeros de Sala en la sentencia de la referencia. La discrepancia se refiere, concretamente, al punto de la Prima de Navidad, por las siguientes razones:

1. La Sala de Casación Laboral ha indicado que, para eximir de la prima legal de navidad, es imperativo que se demuestre que el trabajador recibía una prima extralegal igual o superior, sin que sea la prima semestral de servicios consagrada en la CCT 2001-2004, una prestación con la que se pueda equiparar:

*"En lo atinente a la supuesta incompatibilidad a la que se refiere el instituto convocado al proceso, dado que al demandante le fue reconocida la de servicios con venero en el artículo 50 de la Convención Colectiva de Trabajo, no es admisible, pues como se explicó en la sentencia CSJ SL, del 1º sep.2009, rad. 33676, para que se exima a un trabajador oficial de la prima de Navidad legal, es menester que se demuestre que tenía "derecho a primas anuales de cuantía igual o superior cualquiera sea su denominación", consagradas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, fallos arbitrales o reglamentos internos de trabajo.*

*Ese supuesto no está probado en el asunto bajo escrutinio, pues la cláusula 50 de la convención colectiva de trabajo lo que consagró fue la prima semestral de servicios para compensar la legal que, como lo ha dicho de manera reiterada esta Corte, no está prevista a favor de los trabajadores oficiales, sin que se haya demostrado, se insiste, que la demandante devengaba una prima anual extralegal que excluyera la legal de Navidad, ya que no es dable jurídicamente darles un tratamiento normativo igualitario a prestaciones de estirpe sustancialmente diferente."*

2. En tal sentido, no comparto la decisión de negar el reconocimiento de la prima de navidad al demandante en este caso, pues según el a quo percibía la prima de servicios consagrada en el artículo 50 de la CCT; tampoco se probó en el proceso, que el demandante recibiera una prima extralegal similar, que su cuantía fuera igual o superior al de la prima de navidad.

3. Considero que el demandante, en su calidad de trabajador oficial del extinto Instituto de Seguros Sociales, adquirió el derecho a recibir el pago de la prima de navidad extralegal consagrada en el artículo 51 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del

artículo 11 del Decreto 3135 de 1968, modificado por el artículo 1º del Decreto 3148 de 1968, en concordancia con el Decreto 0853 de 2012, y que equivale a un mes del salario que corresponda al cargo desempeñado el 30 de noviembre de cada año o proporcional al tiempo laborado.

4. Ahora, frente a la excepción de cosa juzgada propuesta por el PAR ISS, como consecuencia de los procesos ordinario interpuestos por el actor, de los cuales tuvo conocimiento el Juzgado 8 Laboral del Circuito de Medellín y Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín, estimo que, en el caso bajo análisis, en relación con el proceso ordinario conocido por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín, es pertinente mencionar que, a pesar de la existencia de identidad de partes, en el mismo se pretendía la recategorización y nivelación salarial del señor OMAR ISIDRO ECHAVARRÍA SERNA, es decir, no era objeto, ni causa en ese litigio la PRIMA DE NAVIDAD.

Frente al proceso ordinario conocido por el Juzgado 8 Laboral del Circuito de Medellín, se observa identidad de partes, de objeto y de causa, empero, a pesar de que la pretensión principal estaba encaminada a la obtención del *"reajuste de prestaciones legales y extralegales teniendo en cuenta el incremento de servicios, así como el reconocimiento de la prima de navidad"*, nada se dijo en relación con esa prestación (prima de navidad). En la sentencia proferida por la Juez de Primera Instancia el 11 de febrero de 2015, la operadora judicial absolvió de la totalidad de pretensiones a la demandada, pero no decidió sobre la pretensión de prima de navidad, se refirió solamente a la procedencia del incremento de servicios y los intereses a las cesantías.

Tampoco fue objeto de discusión la pretensión de prima de navidad en la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el día 07 de septiembre de 2015, providencia en la que fue confirmada la decisión de la A quo, y se tuvo como problemas jurídicos para su resolución, 1) el incremento por servicios, 2) los intereses sobre el saldo de las cesantías retroactivas.

4. El hecho de que la parte afectada con esa decisión, en ese momento, no hubiere apelado el punto en concreto, no hace que pueda inferirse que el juez de la causa dirimió el problema. Por el contrario, si no hizo ningún pronunciamiento al respecto, el tema no fue materialmente decidido.

5. En sustento de lo anterior, me permito transcribir los siguientes apartados de la sentencia 6999 del 30 de octubre de 2002, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:

*"(...) Pero es indudablemente en el denominado límite objetivo, desdoblado en el objeto de la pretensión y en la causa de pedir, en donde más se presentan los problemas tendientes a dilucidar si el segundo proceso replantea un litigio ya*

*decidido en el primero. Con relación al límite objetivo, la Corte ha explicado que si “bien es cierto... hoy resulta indiscutible que el límite objetivo de la cosa juzgada, lo forman en conjunto, el objeto y la causa de pedir, también lo es que no siempre es fácil escindir lo que es materia de decisión en la sentencia, o sea su objeto en sí mismo considerado, y la razón o motivo de la reclamación de tutela para un bien jurídico, desde luego que se trata de dos aspectos íntimamente relacionados entre sí. De ahí porque sea recomendable examinar tales dos cuestiones como si se tratara de una unidad para determinar de esa forma en todo el conjunto de la res iudicium deductae, tanto la identidad del objeto como la identidad de causa: sobre qué se litiga y por qué se litiga” (sent. ago. 20/85, CLXXX, 302).*

*Como pauta interpretativa, dijo la Corte en la aludida sentencia de 2001 que “desde el punto de vista objetivo, la cosa juzgada sólo comprende las cuestiones que efectivamente fueron resueltas, porque ciertamente fueron propuestas, y las que resultan decididas de contera, ya porque las expresamente falladas las conllevan, ora porque lógicamente resultan excluidas y por ende implícitamente definidas. Por contrapartida, no constituye cosa juzgada material las cuestiones que a pesar de haber sido propuestas no fueron decididas expresamente, como acontece con los fallos inhibitorios (C.P.C., art. 333, num. 4º), y las que no se entienden implícitamente resueltas, por no corresponder a la naturaleza y objeto jurídico del proceso, así todo lo que se diga y considere tenga relación con la cuestión realmente propuesta y decidida, porque lo contrario implicaría desconocer caros derechos fundamentales, como el debido proceso y la legítima defensa”.*

6. Consecuente con lo anterior, no aplica en este caso, a mi juicio, la excepción de cosa juzgada propuesta por la entidad demandada.

De esta forma dejo asentado mi disenso respetuoso con la decisión mayoritaria en este evento.

Fecha ut supra.

**JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ**  
Magistrado.

Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

**Jaime Alberto Aristizabal Gomez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**John Jairo Acosta Perez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**  
**Firma Con Salvamento Parcial De Voto**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b44d68deff0a56e6e9e0e5c13fe4d722211737336f0755810614de525c635a58**

Documento generado en 11/08/2022 11:46:16 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**